

México, Estados Unidos y Centroamérica en el contexto de las relaciones interamericanas*

José Luis León M.

1. Ningún análisis de las relaciones interamericanas ni de las posiciones de México y Estados Unidos frente a la problemática de Centroamérica debe soslayar las modificaciones recientes en la constelación mundial de poder, una de cuyas principales causas —y consecuencias— es el cambio de la posición de los Estados Unidos con respecto a la observada desde el fin de la segunda guerra mundial. Los planos en donde tales transformaciones han sido más patentes son el político-militar, el ideológico y el económico, cada uno con diversas características e intensidades.

2. El año de 1989 y los inicios de 1990 han hecho evidente el fin de la confrontación Este-Oeste, nombre que recibió el enfrentamiento político y militar entre Estados Unidos, a la cabeza del Occidente capitalista, y la Unión Soviética en tanto que líder de las naciones gobernadas por lo que hoy universalmente se reconoce como una forma de socialismo burocrático y profundamente autoritario: el stalinismo.

El fin de la guerra fría, que en retruocanado rescate del hegelianismo los miopes suelen confundir con el fin de la historia, ha tenido como consecuencia el retiro de la Unión Soviética de numerosos focos de tensión en el orbe, la ruptura de la lógica bipolar en los enfrentamientos regionales e internacionales, y un reacomodo de las fuerzas políticas y estratégicas en Europa. Con ello, las tensiones han tendido a disminuir y,

aun cuando los armamentos nucleares siguen en su mayoría sin destruirse, la amenaza inminente del holocausto atómico generalizado es mucho más lejana que en años pasados.¹

Sin embargo, el vaticinio de algunos analistas en el sentido de que al retiro soviético de Europa del Este, Afganistán y sus zonas de influencia en la periferia correspondería una actitud recíproca de los Estados Unidos ha resultado, a la vuelta de los meses, rotundamente fallido. No sólo Washington no ha dejado de pensar en términos de posiciones geopolíticas y zonas de influencia, sino que se ha dado a la tarea de construir aceleradamente lo que Richard Spielman ha bautizado como la "unipolaridad" de la política mundial,² en donde Estados Unidos fungiría precisamente como el único polo de poder militar: un redivivo policía internacional como el que Teodoro Roosevelt concibiera a principios del siglo xx en su célebre corolario a la Doctrina Monroe.

En el futuro previsible, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses, es posible que los más afectados por ese unipolarismo resulten ser los pueblos y países del Sur que no se avengan a su dominio. Así inducen a pensar las invasiones de Panamá (diciembre de 1989) y Liberia (julio de 1990), al igual que los desmesurados amagos bélicos con que hasta el momento de escribir estas líneas Washington desafiaba al régimen de Irak por su ilegal anexión de Kuwait.

* Ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Latinoamericanistas "América Latina a fines del siglo xx", organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del 5 al 7 de septiembre de 1990. Parte de la investigación se financió con fondos del Programa de Asuntos Críticos del University of California Consortium for Mexico & the United States (UC MEXUS) y la Fundación John D. and Catherine Mac Arthur.

1. Un indicador confiable de esta tendencia: el célebre reloj del *Bulletin of the Atomic Science*, que en 1985 metafóricamente marcaba tres minutos como plazo para la extinción de la especie humana a causa de una guerra nuclear, en 1990 ha hecho retroceder sus manecillas a un cuarto de hora antes del colapso.

2. Cit. por Lorenzo Meyer, "Repudio a la unipolaridad", *Excelsior*, 29 de agosto de 1990, p. 10-A.

3. La unipolaridad estadounidense en materia político-militar se corresponde con la indudable hegemonía ideológica del liberalismo. "Libre mercado" es hoy, en todo el mundo, el altar en donde las fuerzas capitalistas se prosternan para agradecer al dios Pluto su rotundo triunfo sobre el anquilosado modelo stalinista de Europa Oriental. Con todo, y si de triunfos capitalistas se trata, las realidades del mundo contemporáneo limitan el abanderamiento contundente de cualquiera de los tres grandes bloques del sistema capitalista (Estados Unidos-Canadá, Europa Oriental-Occidental y el bloque japonés-asiático) como el núcleo más importante de las relaciones económicas internacionales.

En efecto, pese a la desesperada política norteamericana de prestigio militar, los mayores retos para su hegemonía no cruzan tanto por ese terreno, sino más bien lo hacen en el comercial y económico, donde Japón y Europa tienen posiciones ventajosas. Mientras Estados Unidos cultiva con singular pasión el evangelio del libre mercado capitalista (bien que su "libre mercado" esté protegido en favor de los especuladores bursátiles y la industria militar), los japoneses y europeos (en cuyo "libre mercado" los fondos del Estado apoyan al capital productivo) cosechan sin mayor dificultad los dividendos contantes y sonantes de esa cruzada.³

Así, al comparar los saldos de cuenta corriente de la balanza de pagos de los tres países entre 1982 y 1988, se encuentra que los indicadores fueron desfavorables en todos los años a Estados Unidos, cuyo déficit pasó de 8.7 mil millones de dólares en 1982 a 154 mil millones para 1987; aunque el año siguiente la cifra llegó a -135.3 mil millones de dólares, el déficit continuó siendo abrumador. En tanto, la RFA y Japón vieron aumentar velozmente y sin cesar sus saldos positivos: durante el lapso 1982-1988 el superávit de la primera pasó de 5.1 a 48.5 mil millones de dólares y el del segundo de 6.9 a 79.5 mil millones de dólares.⁴

3. En torno a este tema véase James F. Petras, "The World Market: Battleground for the 90's", Nueva York, 1989, *mimeo*.

4. Cfr. Fondo Monetario Internacional, *World Economic Outlook*, abril de 1989, p. 156.

Es probable que el crecimiento del activo en las balanzas de estos dos países hubiese sido aún más espectacular de no haber existido las medidas proteccionistas que Estados Unidos fue adoptando cada vez con más fuerza a lo largo de la década pasada.

4. En este sentido, resulta paradójico el papel que Estados Unidos está jugando en el escenario internacional: mientras su centenaria ideología librecambista se ha vuelto prácticamente hegemónica en todos los rincones del planeta, el bagaje material de que ese país dispone para sacar ventaja de ella es sumamente limitado.

Las fuerzas liberal-papistas han triunfado en Polonia, la restauración capitalista es un hecho en Hungría, el gobierno empresarial y proestadounidense de la Unión Nacional Opositora ha tomado cuerpo en Nicaragua, y la difusa coalición que mantiene en el gobierno a Guillermo Endara y asociados en Panamá aún goza de un cierto —aunque menguante— consenso interno. Pero: ¿qué ha ofrecido Estados Unidos para afianzar el espíritu de Adam Smith en esas naciones? Prácticamente nada: la "mano visible" del Estado capitalista contemporáneo más fuerte no ha podido proveer de más de 2 mil millones de dólares en ayuda a esos países tan importantes para sus proyectos estratégicos —cantidades de recursos muy lejanas de las necesarias para reactivar sus vapuleadas economías y aún más distantes de cualquier versión de un "Plan Marshall".

En el caso de la propuesta que el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, lanzara en marzo de 1989 para aliviar en alguna medida la deuda externa del Tercer Mundo —en especial la de América Latina— las limitaciones del Estado norteamericano para convencer a los banqueros de condonar —o reducir— porcentajes de la deuda y surtir de nuevos créditos a los países con problemas también saltan a la vista, y ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno de Washington para regular la conducta de los agentes privados, si bien ambos coinciden, ideológicamente, en la defensa del neoliberalismo.

De este modo, una cosa es el amplio consenso que la élite ideológica norteamericana ha logrado en el campo del *marketing* del pensamiento, y otra es la disponibilidad real de fondos de ayuda e inversiones directas para los países que se han montado en el carro de la victoria del

sistema liberal capitalista. Allí, la realidad suele chocar con el discurso y los *arrangements* que explicita la órbita de las teorías se contradicen con la liquidez que Washington tiene para apoyar incondicionalmente a sus nuevos y viejos aliados.

Como bien se sabe, la situación de la propia economía norteamericana dista, a pesar de siete años de crecimiento continuo del producto interno bruto, de ser alentadora. Entre 1980 y 1987 la deuda federal bruta de los Estados Unidos pasó de 914 mil 300 millones a 2.35 billones de dólares; y la suma de las deudas pública, privada, estatal y local había alcanzado, a finales de 1987, los 5 billones de dólares (es decir, cinco veces más que el total del débito externo de los países en desarrollo), aunque ciertos autores la sitúan en un nivel superior a los 10 billones de dólares. Las quiebras bancarias han aumentado geométricamente, el crecimiento de las manufacturas y la inversión neta ha sido mucho más lento que en décadas anteriores, y la estructura de la distribución del ingreso no observaba niveles de desigualdad como los actuales al menos desde 1929.⁵ Asimismo, los escándalos financieros se van haciendo cada vez más abundantes y el sistema económico (en el que aún, es cierto, podemos encontrar también algunos indicadores de fortaleza) parece estar pendiendo de hilos que se adelgazan más conforme el tiempo transcurre.

5. ¿Hasta qué grado el repunte militar e ideológico y la relativa decadencia económica y comercial de Estados Unidos se están reflejando en las relaciones con sus vecinos cercanos? ¿Cuáles son las repercusiones para América Latina de los cambios en la constelación global de poder? ¿Cuáles son los alcances y cuáles los límites de la concertación intralatinoamericana y la autonomía regional frente a la potencia del norte?

5. Estos y otros indicadores de la economía norteamericana pueden consultarse *inter alia*, en: Ravi Batra, *La gran depresión de 1990*, México, Grijalbo, 1988; Harry Magdoff y Paul M. Sweezy, *Estancamiento y explosión financiera en Estados Unidos*, México, Siglo XXI, 1988; y José Luis León, "La crisis de la economía mundial: retos y perspectivas para México", *Revista Mexicana de Política Exterior*, año 6, núm. 24, México, julio-septiembre 1989, pp. 38 y 55.

En una perspectiva de largo aliento, es obvio que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han sufrido, en los últimos cuarenta años, importantes modificaciones de fondo y forma. Por ejemplo, aunque la crítica de la mayoría de las naciones latinoamericanas ante la invasión norteamericana de Panamá el 20 de diciembre de 1989 resultó más bien tibia, América Latina logró cuajar una expresión de desagrado colectivo de no pocas implicaciones para las circunstancias vigentes en ese entonces.

Que los tiempos han cambiado y el carácter profundo de las relaciones interamericanas también, lo comprueba el análisis numérico de los votos atinentes a la resolución de la OEA fechada el 8 de enero de 1990, en donde se exige a Estados Unidos respetar las normas de derecho internacional a raíz del allanamiento de la residencia de la Embajada de Nicaragua en Panamá por un centenar de soldados estadounidenses. En la ocasión, 19 países votaron por la censura a Washington, siete (la mayoría centroamericanos y caribeños) se abstuvieron y ninguno emitió su voto en contra. Recuérdese, con miras a comparar situaciones y contextos, que una reunión de consulta de la propia OEA convocada expresamente para romper relaciones con la Cuba castrista en julio de 1964 logró su objetivo con 14 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención: un resultado casi exactamente inverso al de la votación de 1990.

¿Cómo ha sido posible llegar a esta situación? Encontramos por lo menos cinco razones que contribuyen a explicarla:

- i) La disminución relativa del peso de la economía estadounidense dentro del mercado mundial, que la llevó de generar el 45% del PIB global en 1945 a casi la mitad en los ochenta.
- ii) La inconsistencia y los vaivenes de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, que han provocado que las élites políticas antaño aliadas con Washington contemplen con creciente desconfianza la diplomacia norteamericana hacia la región.
- iii) La menguante operatividad de los organismos interamericanos (TIAR y OEA) que tras la segunda posguerra se habían consolidado

como baluartes de la política latinoamericana de Estados Unidos.

- iv) El crecimiento y diversificación de las economías latinoamericanas, que tomó cuerpo entre los años cuarenta y la década de los setenta. En ese lapso, América Latina vio surgir nuevos grupos sociales y políticos —muchos de ellos con vocación de autonomía frente al Norte— además de que mantuvo un despegue industrial comparable con el que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1890 y 1914.⁶ Ello redundó naturalmente en el aumento de la capacidad de maniobra de los gobiernos de la región así como en el atenuamiento de la otrora indisputable hegemonía norteamericana sobre ella, por lo cual las acciones autónomas en la política exterior de Brasilia, México, Buenos Aires, Caracas y otras capitales tendieron a multiplicarse conforme el tiempo transcurría.
- v) El surgimiento y persistencia de movimientos populares y gobiernos que, o no están propiamente alineados con Estados Unidos o bien se proclaman abiertamente socialistas. Tal es el caso del gobierno de Castro en Cuba o de la Revolución Sandinista en Nicaragua, pero también de movimientos que como el Frente Farabundo Martí de El Salvador han logrado establecer considerables vinculaciones internacionales, incluso con naciones que son aliadas de Estados Unidos en un plano más general.
- vi) La crisis de los ochenta y los noventa que, con hechos como la Guerra del Atlántico Sur, las invasiones de Granada y Panamá, los yerros de Reagan y Bush en Centroamérica y la poca capacidad (y disposición) del gobierno estadounidense de contribuir a la resolución del problema del endeudamiento latinoamericano, ha erosionado aún más el liderazgo y la hegemonía de Washington en América Latina.

Es cierto que todos estos procesos, tomados aisladamente y en conjunto, han contribuido a hacer menos abrumador el peso de Estados Unidos en las relaciones interamericanas, pero igualmente verdadero es que los haberes latinoamericanos en este sentido también deben relativizarse.

En primer lugar, no se ha presenciado en todos estos años una nítida voluntad integracionista. A pesar de la retórica bolivariana que se gasta en el ámbito de numerosas instancias regionales, el despegue industrial y la diversificación productiva de las economías latinoamericanas no se han correspondido —y menos aún a raíz de la reciente crisis— con una integración política y comercial que podría haber fortalecido como pocas veces en la historia las posiciones y valores de América Latina en el ámbito internacional. En los ochenta el comercio interregional cayó en más de 3 mil millones de dólares anuales como promedio, y hoy se registran niveles de intercambio inferiores en 18% a los de 1979.

En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, está la declinante participación latinoamericana en el comercio mundial, hecho por el cual se comienza a hablar de un proceso de "africanización". Aunque dramática, la comparación es rigurosamente cierta: entre 1970 y 1987 el componente latinoamericano en el total de los flujos de bienes a nivel mundial pasó de 5.5% a 3.9 por ciento.⁷

Por último, pero de la mayor importancia, la disminución del dominio norteamericano en nuestra América no significa —aun contando con el fortalecimiento de las tendencias autonomistas y la permanencia de gobiernos o fuerzas políticas poco afines a los designios de la potencia hegemónica del hemisferio— que Estados Unidos haya dejado de tener la fuerza suficiente para establecer las líneas de la agenda americana, ni que haya perdido su capacidad para limitar los procesos de cambio social en el área. Si bien es cierto que la Revolución Cubana no ha podido ser derrotada militarmente como lo fue el experimento reformista guatemalteco de Jacobo Ár-

6. Abraham F. Lowenthal, "Not Berlin, but Still Germane", *Hemisfile*, mayo 1990, La Jolla, California, p. 2.

7. Cfr. CLEPI, *Informe de la economía mundial: perspectiva latinoamericana. El desafío de la incertidumbre*, Santiago, Chile, 1988.

benz en los cincuenta, y que las revoluciones sandinista y salvadoreña tampoco han podido finiquitarse del todo por la vía exclusiva de las armas, no menos verdadero resulta que Estados Unidos conserva la capacidad de alterar los tiempos de las revoluciones y, lo que es más, de forzar modificaciones políticas y económicas en su programa original allí donde éstas han logrado establecerse como gobiernos.

6. Centroamérica en general y Nicaragua en particular son ilustrativas de este *poder de veto a medias* que Washington aún puede ejercer en nuestro continente.

En parte como efecto de una obsesiva y despiadada "guerra de baja intensidad" librada por Estados Unidos a todo lo largo de los ochenta contra Nicaragua, y en parte como cobro de la factura por los errores cometidos por algunos cuadros de la burocracia sandinista, las elecciones del 25 de febrero pasado arrojaron como vencedora a la Unión Nacional Opositora, coalición heterogénea pero a todas luces más agradable que el Frente Sandinista a los ojos norteamericanos.

Lo anterior, aunado a la existencia de gobiernos más o menos conservadores en el área, al desarme de la *contra* y a los procesos de diálogo entre insurgencias y gobiernos en El Salvador y Guatemala, podría estar haciendo pensar a los estrategas estadounidenses que el conflicto centroamericano se terminó de una manera casi tan imprevista —pero tan contundente— como según ellos llegó. En esta perspectiva, según la cual el activismo nicaragüense era la única fuente de tensiones en Centroamérica, la derrota sandinista en los recientes comicios bastaría para levantar el acta de defunción de la crisis. La realidad es mucho más compleja y, al propio tiempo, preocupante. Los sandinistas dejaron el gobierno en un ejemplar proceso de transición democrática, pero los problemas y las necesidades del área siguen allí, intocados en muchos sentidos. A mi juicio son tres las necesidades inmediatas del área centroamericana: la pacificación, la reconstrucción económica y la redefinición de las relaciones del área con Estados Unidos.

Ciertamente, la *paz* parece más cercana actualmente que en los ochenta. Ello, sin embargo, no significa que ya se haya llegado a ella o que esté a punto de llegarse. Hay una luz al final del

túnel, pero la tierra está todavía floja; incluso un grito demasiado fuerte de cualquier actor podría propiciar una avalancha y lanzar nuevamente a Centroamérica por el sendero de la guerra. Que la pacificación no coagula aún de modo suficiente lo demuestra, en el caso de El Salvador, el *impasse* de las negociaciones que han tenido lugar en México, Caracas y San José en torno a un tema fundamental como es la restructuración de las fuerzas armadas. En Guatemala persisten grupos paramilitares que continúan usando la violencia como manera para intentar el ordenamiento coercitivo de las relaciones políticas, mientras que el hecho de que el grueso de la *contra* nicaragüense haya depuesto las armas el 27 de junio pasado no implica que no subsistan grupos políticos y económicos —bastante poderosos— que estarían dispuestos al derramamiento de sangre con tal de llegar a una restauración somocista que, dicho sea de paso, *no* fue el sentido del voto del pueblo nicaragüense en los pasados comicios.

En este asunto también será de la mayor importancia la actitud de Estados Unidos. Si este país desiste de su apoyo acrítico a las fuerzas retardatarias en Centroamérica y si a su abstracción preocupada por los derechos humanos siguen acciones concretas, el camino hacia la paz se haría más fácil de recorrer. Existen signos positivos en esta línea (como el recorte del 50% en la ayuda militar a El Salvador aprobado por la Cámara Alta en octubre de 1990) y los meses próximos seguramente arrojarán mayores elementos de juicio para ser optimistas o no respecto a la pacificación regional.

La *reconstrucción económica* es el segundo de los requerimientos urgentes de Centroamérica. Al cabo de una década de guerra el balance es escalofriante. según datos de la CEPAL, entre 1981 y 1989 la economía de los países centroamericanos considerados en su conjunto prácticamente permaneció estancada; el producto bruto por habitante registró una variación acumulada promedio de -17.4%; la inflación apareció con una fuerza nunca antes vista en la región; los salarios cayeron de manera continua; el poder de compra de las exportaciones —y el *quantum* de éstas— descendió notablemente, y la deuda externa regional ronda ya los 20 mil millones de dólares, frente a los 5 mil millones de dólares que había alcanzado hacia finales de los setenta. La ingente destrucción de los recursos

materiales y de la estructura productiva regional como consecuencia de la guerra se hace intolerable, máxime en la medida que los precios de los productos centroamericanos de exportación vienen cayendo en los mercados mundiales desde hace varios años, y la crisis del Pérsico ha disparado los precios de los hidrocarburos, de los cuales Centroamérica es importadora neta. Súmese a ello que los daños directos en Nicaragua tras 10 años de contrarrevolución llegan a mil 500 millones de dólares; que únicamente desde la ofensiva rebelde de noviembre de 1989 en El Salvador se han perdido 120 millones de dólares y que la invasión a Panamá provocó daños estimados en por lo menos 600 millones de dólares, y se tendrá una idea más cabal del difícil panorama económico.⁸

La reconstrucción, entonces, es urgente, pero requiere de varios requisitos previos o, al menos, simultáneos. Primero —y esto resulta una obviedad— requiere de la paz; segundo, es necesario reactivar el crecimiento, pero las limitaciones del modelo agroexportador con industrialización incipiente que se hicieron evidentes hacia finales de los setenta, hacen necesario pensar en un nuevo motor de dinamismo económico y acumulación de capital; y tercero, este nuevo modelo necesitaría, para no repetir la experiencia del “desarrollo aditivo” de los sesenta y setenta (cuando había altas tasas de crecimiento económico pero la solución de los grandes problemas sociales brillaba por su ausencia), de una estructura de distribución del ingreso radicalmente distinta a la que en el pasado contribuyó a dar origen a las revoluciones y la turbulencia social en Centroamérica.

Un último imperativo para Centroamérica es la *redefinición de sus relaciones con Estados Unidos*. En este renglón habría que preguntarse, no sin cierta dosis de pragmatismo, si para la salvaguarda de los intereses estratégicos de Estados Unidos —vale decir, de su “seguridad nacional”— sigue siendo necesaria la alianza con escuadrones de la muerte, la preservación de la miseria de las mayorías, y el uso de la fuerza militar para el intento de liquidación de los brotes

de no alineamiento que le parecen incómodos. ¿No habrá llegado la hora de que el propio Washington tome nota de los cambios ocurridos en el mundo y emprenda un esfuerzo de revisión de sus conceptos de “seguridad nacional”, en especial en lo que respecta al área centroamericana?

7. Desde mediados del siglo pasado, pero con particular intensidad a partir del inicio del presente, a Centroamérica y el Caribe se le consideró el “patio trasero” de Estados Unidos. Durante la recién terminada década de los ochenta se argumentó que el gobierno de Managua era una “cabeza de turco” que la URSS mantenía para afectar los intereses norteamericanos en Centroamérica y el Caribe. Pero ¿cuáles son esos intereses? El detallado estudio de un especialista en cuestiones geopolíticas identifica los siguientes tres objetivos estadounidenses de seguridad en la zona: 1) afianzar un flanco sur pacífico y estable que permita a Washington atender otros asuntos políticos y económicos en el resto del mundo; 2) garantizar el acceso de sus empresas y ciudadanos a las materias primas, comercio, oportunidades de inversión y uso de las rutas de comunicaciones y transportes; y 3) mantener a potencias hostiles alejadas del Caribe.⁹

Con respecto al punto 1), me parece que la existencia de regímenes políticos que promuevan el cambio social en coordenadas distintas a la cultura política y económica estadounidenses no es una amenaza *per se* a la seguridad norteamericana. Ningún país centroamericano o caribeño, por poderoso o belicista que fuera o quisiera ser, desearía una confrontación con Estados Unidos. Ello no es logística ni materialmente posible.

Esto significa, como lo ha demostrado Cuba desde 1959 y como lo demostró Nicaragua entre 1979 y 1990, que la no satelización al sistema capitalista norteamericano no conlleva de ningún modo la absurda pretensión de bloquear su funcionamiento por la fuerza. Por lo tanto, si bien es cierto que el 44% del total del tonelaje de

8. Cfr. Edelberto Torres-Rivas, Carlos Sojo y Abelardo Morales, “Centroamérica y el tamaño de nuestra soledad”, *Centroamérica Internacional*, núm. 3, San José, abril-mayo 1990, p. 9.

9. Véase Jack Child, “Variables para la política de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe en la década de 1980: seguridad”, en *Intereses occidentales y política de Estados Unidos en el Caribe*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985, p. 46.

transporte extranjero y el 45% del petróleo crudo importado por Estados Unidos pasa por el Caribe, y que materias estratégicas como la bauxita se producen allí, también lo es que las vías de comunicación necesarias para este tráfico —en especial el Canal de Panamá— están lejos de ser amenazadas por países 50 ó 100 veces menores en población (y acaso miles de veces más pequeñas en poderío económico) que Estados Unidos. Tampoco hay motivo para suponer que los Estados revolucionarios o reformistas en América Central amenacen necesariamente las inversiones norteamericanas (que sólo representan el 2% total de la inversión externa directa de Estados Unidos), ni el poco significativo comercio con la zona (1% del total norteamericano). Así, por ejemplo, el gobierno sandinista reconoció en todo momento las deudas contraídas por Somoza, buscó —aunque no lo obtuvo— el comercio y la ayuda estadounidenses y fue sumamente tímido para nacionalizar las inversiones privadas norteamericanas. Si la relación económica entre Estados Unidos y la Nicaragua sandinista no prosperó, no fue a causa de las rigideces ideológicas y las agresiones de los revolucionarios nicaragüenses, sino debido a las de los ideólogos de Washington.

En referencia al punto 3), en la actualidad se antoja muy difícil —cuando no virtualmente imposible— que potencias extranjeras decidan invertir capital político y diplomático para inmiscuirse en Centroamérica y el Caribe: pese a su fuerza económica y su potencial para penetrar mercados, ni la Europa Comunitaria ni Japón parecen dispuestos a buscar desaveniencias con su principal socio en Occidente a cambio de la búsqueda de una serie de mercados contraídos, en el contexto de economías sumamente deterioradas; la Unión Soviética, si alguna vez tuvo pretensiones de erigirse como contrapeso al poder norteamericano en el área, debe estar pensando seriamente —como de hecho lo denota su discreto pero creciente alejamiento de Cuba— en la mejor manera de retirarse de ella y volcarse de lleno en su delicado proceso de transformación política y económica interna conocido universalmente como *perestroika*. Fuera de estos países: ¿quién podría amenazar seriamente —de manera militar o aun económica— la preeminencia norteamericana en el área?

Lo que resulta paradójico en el anticuado tratamiento que Estados Unidos ha insistido en dar

a la crisis ístmica, es que la militarización regional y el bloqueo económico contra Nicaragua han tendido a generar condiciones de mayor inestabilidad social que a su vez provocan fenómenos tan importantes como la migración masiva. Aunque es difícil compartir la tesis de que el éxodo centroamericano en dirección a América del Norte constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, no cuesta mucho trabajo entender lo dramático del proceso debido, por un lado, a las dificultades materiales que implica recibir a una enorme masa humana y, por otro, a las implicaciones psicosociales que afectan a todo migrante —especialmente cuando su punto de destino es una sociedad radicalmente distinta de aquella en la cual ha vivido la mayor parte de su vida.

Como dice Sergio Aguayo: "La cantidad de desplazados es enorme. Las estimaciones van de 1 millón 800 mil a 2 millones 800 mil personas. Esto representa porcentajes diversos en la población de cada país; por ejemplo, entre un 3% y un 7.5% de guatemaltecos y entre un 25 y un 29% de salvadoreños. Esta situación presenta difíciles retos humanitarios, económicos, políticos, jurídicos e internacionales."¹⁰ Es sintomático que del grueso de migrantes y desplazados internos, un millón sean salvadoreños que residen en Estados Unidos.¹¹

Si, como hemos intentado demostrar, los Estados Unidos no enfrentan amenazas de potencias extranjeras en Centroamérica, y si el funcionamiento de su sistema socioeconómico no está puesto en tela de juicio por las fuerzas revolucionarias del área: ¿no sería mejor para los intereses nacionales y la imagen internacional de Washington colaborar —mediante la ayuda económica por la vía de organismos multilaterales y el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos— a que la inquietud social disminu-

10. Sergio Aguayo, "Las poblaciones desplazadas y la recuperación y el desarrollo Centroamericano", en William Ascher y Ann Hubbard (eds.), *Recuperación y desarrollo de Centroamérica*, Duke University, Durham y San José, 1989, p. 21.

11. Cfr. Segundo Montes, "La crisis social agudizada por la crisis política salvadoreña: la migración a Estados Unidos, un indicador de la crisis", *Relaciones Internacionales*, núms. 24-25, Heredia, Costa Rica, tercer y cuarto semestres de 1988, pp. 8 y 9.

ya, y a arraigar de este modo a los potenciales migrantes? Aquí se hace urgente, una vez más, la necesidad de redefinir el concepto de seguridad nacional esgrimido por Estados Unidos para lidiar con la crisis centroamericana.

8. No cabe duda que la migración es un reflejo claro de la continuidad de la problemática en el istmo. Esto ha repercutido también sobre México al menos desde principios de los ochenta, cuando la migración de refugiados guatemaltecos comenzó a aumentar sensiblemente. Sumado a la posibilidad de una guerra generalizada en la región —bajo la cual el país se vería enfrentado a una delicada situación diplomática y geopolítica— el hecho anterior dio paso a una política mexicana hacia Centroamérica más activa que la que el país había venido practicando en décadas anteriores.

En un primer momento (1978-1982), la posición de México fue la de manifestar un constante apoyo a las fuerzas revolucionarias centroamericanas, sobre todo en Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, hacia mediados de 1982 las limitaciones del modelo de "desarrollo petrolizador" adoptado desde 1976-77, aunadas a la crisis económica internacional —que afectó con particular intensidad a la periferia— precipitaron a México en una profunda crisis que, a querer o no, tendía a modificar su poder material para poder seguir sosteniendo una política centroamericana igual a la iniciada un poco antes del triunfo de la Revolución Sandinista. Por otro lado, el incremento de la tensión producida por la militarización del área y los amagos de intervención directa en Nicaragua o El Salvador por parte de la administración norteamericana, originaron una nueva dinámica que también impactó sobre la diplomacia mexicana.

Así, en un segundo momento (1983-1987) el país asumió una línea de mediación y, junto con otras tres naciones limítrofes con Centroamérica, inició en enero de 1983 el proceso de negociaciones del Grupo de Contadora que, tras un tortuoso ejercicio diplomático, dio lugar a desarrollos como el Grupo de Río y, muy importante, abrió los canales de comunicación que antecedieron al proceso de Esquipulas II.

La firma del "Procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica" en la cumbre de presidentes centroamericanos, efectuada el 7 de agosto de 1987, dio pie a

nuevos espacios de negociación y brindó a México un nuevo papel, más centrado en la cooperación de todo género y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Hasta la fecha, México ha aportado alrededor de 700 millones de dólares en asistencia a los países de América Central.

Aun cuando debido al nuevo ordenamiento de fuerzas en la región y a los derroteros que ha tomado el proceso de Esquipulas II la problemática del istmo ya no es tan crítica para la política exterior mexicana, y a pesar de que el lugar de dicho conflicto en la agenda bilateral con Estados Unidos es más discreto que antaño, Centroamérica sigue ocupando un sitio muy importante (con una potencialidad aún mayor a mediano plazo, sobre todo si la paz y la reconstrucción no llegan a cuajar) para México.

9. No habrá paz sin cambio social en Centroamérica. Yerran quienes confunden la derrota electoral del sandinismo en Nicaragua con la posibilidad de la restauración somocista y quienes no pueden concebir la lógica de la negociación y la política sino como una capitulación.

No obstante ello, el diálogo avanza y la paz parece posible; pero cualesquiera que sean los acuerdos a los que finalmente lleguen gobiernos e insurgencia, no se podrá obviar, si se quiere una "paz firme y duradera" en Centroamérica, una transformación profunda de las estructuras socioeconómicas y políticas de esos países. Si la paz sólo se concibe como la incorporación electoral de los grupos rebeldes y se desatiende la dimensión social y económica del conflicto, no debería extrañarnos que en el futuro surjan nuevos brotes armados que retomen banderas igualitarias.

Como ya se anotó, pareciera que para el más conspicuo actor extrarregional el problema de Centroamérica eran los sandinistas nicaragüenses y que, desalojados éstos del gobierno, las complicaciones se terminaron; en el mejor de los casos y en esta perspectiva, hoy sería tiempo de dar paso a la reactivación del crecimiento económico regional. Desde luego, ello es necesario pero no suficiente para guardar tranquilidad. Insistimos: ninguna propuesta de asistencia económica, por más que pueda reunir los fondos necesarios para echar a andar la planta productiva (cosa que parece cada vez más remota), será una solución a fondo si no se acompaña de la erradicación —o al menos atenuamiento— de la

pobreza, la creación de empleos, la distribución de la tierra, la erección de sistemas democráticos integrales y el destierro de la violencia como forma irracional de ordenar las relaciones sociales.

10. Volvemos a Estados Unidos y las relaciones interamericanas. Aunque Washington sigue declinado en el campo económico, y a pesar de la contradicción entre su menguante fuerza comercial y la creciente fuerza de su ideología neoliberal, los acontecimientos recientes denotan una construcción teórica que tiende al unipolarismo militar en cuestiones de política internacional.

Por ello, a pesar de los enunciados contenidos en la "Iniciativa para las Américas" lanzada por el presidente Bush en junio de 1990, el elemento militar de la política latinoamericana de

Washington pende aún sobre el istmo central del continente, y sus visiones de seguridad nacional no se han transformado de manera sustancial. Como nunca las condiciones podrían estar dadas para un *cambio de actitud* de Estados Unidos frente a las transformaciones sociales en América Latina y en Centroamérica en particular: un cambio de actitud que vaya más allá del discurso del libre comercio como panacea para todos los males del mundo.

Pero mientras ello no suceda, es probable que subsistan ciertas tensiones políticas entre Estados Unidos por un lado y América Latina y México por otro (como lo demostró la invasión a Panamá), en diversos niveles y con distinta intensidad. Los tiempos de fin de siglo no reclaman a Washington nostalgias de los cincuenta, sino actitudes maduras y enfoques creativos en sus relaciones con sus vecinos del sur.